**DEMOCRATIZACIÓN SIN REPRESIÓN, EXCEPCIÓN
EN EL CASO COLOMBIANO: EL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL DE LA SÉPTIMA PAPELETA O
*TODAVÍA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA***

RENATA AMAYA

Universidad de los Andes
Facultad de Derecho
Revista de Derecho Público N.º 30
Enero - Junio de 2013. ISSN 1909-7778

Democratización sin represión, excepción en el caso colombiano: el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia**

Renata Amaya**

RESUMEN

Colombia ha sido un espacio político en el que la democracia y la represión parecen transcurrir por el mismo camino; por ello, resulta relevante preguntarse cómo se presentó el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía Podemos salvar a Colombia*, a finales de la década de los ochenta, tiempo en el que el país enfrentaba diferentes tipos de violencia, como el narcoterrorismo, las acciones de los grupos armados al margen de la ley, la corrupción del Estado y el asesinato de líderes políticos y de ciudadanos. En este escenario surge la pregunta que pretende responder el presente texto: ¿existió algún tipo de represión (control, acallamiento, contención, silenciamiento, limitación, rechazo, que limitara o impidiera el ejercicio de los derechos y libertades civiles) contra las ac-

ABSTRACT

Colombia has been a political space where democracy and repression seem to walk on the same path. That is why it is relevant to question how occurred the students' movement called la Séptima Papeleta o *Todavía Podemos salvar a Colombia* at the end of the 1980s where come together different kinds of violence such as drugs dealers terrorism, illegal armed groups actions, state corruption and murdering of political leaders and citizens. On this scenario appears the question faced on this paper: was there any kind of state repression (control, restriction or rejection against the free exercise of first rank rights and civil freedoms), against the actions developed by the students' movement that established the basis for the 1991 constitutional reform?

---

* Trabajo final presentado en la clase Democracia y Represión, al profesor Francisco Gutiérrez, con fecha 4 de diciembre del 2012, en el marco del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, que la autora se encuentra realizando. En su construcción fue importante la colaboración de María José Maya, abogada, profesora de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y actual asistente de la Ombudsperson de la Universidad, a quien la autora expresa su agradecimiento.

** "Abogada y antropóloga de la Universidad de los Andes. M. A. in Liberal Studies (mayor in Political and Social Sciences in New School for Social Research. Docente de cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y coordinadora de Investigaciones Dirigidas y del Programa Sócrates de la misma institución. Está iniciando el doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Colombia. Correo-e: ramaya@uniandes.edu.co"

ciones del movimiento estudiantil que dio lugar a la reforma constitucional de 1991?

PALABRAS CLAVE: represión, protesta social, movimiento estudiantil, Séptima Papeleta, Constitución Política, criminalización.

KEY WORDS: Repression, Social protest, Students' movement, Séptima Papeleta, Political Constitution, Criminalization.

SUMARIO

Introducción – I. PRIMERA PARTE. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA –
A. Ubicación conceptual – B. Contexto político-normativo de la protesta social en la segunda mitad del siglo XX en Colombia – II. SEGUNDA PARTE. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA SÉPTIMA PAPELETA O TODAVÍA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA, COMO UN EJEMPLO DE PROTESTA SOCIAL – *A. Los catalizadores del movimiento: el dolor y la sangre – B. El Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta o Todavía podemos salvar a Colombia – C. Las acciones del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta o Todavía se puede salvar a Colombia como expresión de la protesta social – D. Culminación del movimiento: promulgación de la Carta Política de 1991* – III. TERCERA PARTE. REACCIÓN DEL ESTADO FRENTE AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA SÉPTIMA PAPELETA O TODAVÍA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA – IV. ALGUNAS IDEAS INCONCLUSAS – Bibliografía.

Introducción

En Colombia, durante la segunda mitad del siglo XX, la protesta social fue altamente reprimida por el Estado, que contaba con herramientas constitucionales y penales para criminalizarla. Entre estas últimas se destacan el delito de asonada y el de rebelión —que aunque continúan tipificados penalmente, tienen un propósito diferente a aquel bajo el que fueron creados—. Además de poder limitar las libertades individuales en estados de excepción, en los cuales nuestro país estuvo casi ininterrumpidamente entre 1978 y 1990¹.

Así mismo, confluyeron diferentes formas de violencia como el narcoterrorismo, las acciones de los grupos armados al margen de la ley, la corrupción del Estado y el asesinato de líderes políticos y de ciudadanos². En este escenario surge el siguiente cuestionamiento: ¿existió algún tipo de represión (control, acallamiento,

contención silenciamiento, limitación, rechazo, que limitara o impidiera el ejercicio de los derechos y libertades civiles) contra las acciones del movimiento estudiantil que dio lugar a la reforma constitucional de 1991?

A lo largo de este trabajo demostraré que el Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia*³ es un ejemplo de protesta social que promovió y apoyó el proceso de democratización que llevó a la promulgación de la Constitución de 1991. Resulta paradójico que en el escenario de represión y violencia previamente descrito, el movimiento haya sido interpretado de forma sistemática como una fuerza democratizante⁴, como la voz de la sociedad civil en pleno y que no hubiera estado, al menos abiertamente, sujeto a acciones de silenciamiento ni de contención por parte del Estado. En efecto, este movimiento desarrolló sus actividades como entre una burbuja que protegió a sus líderes de los asesinatos, se-

1 Se han establecido por lo menos tres periodos de estados de excepción, entre ellos y para efectos del presente trabajo nos compete el segundo que inicia con el gobierno de Turbay Ayala (1978) y termina con el fin del mandato del presidente Virgilio Barco (1990). Pese a lo anterior, es importante mencionar que “(...) en estos años, la excepción perdió fuerza como instrumento de control social —en parte por la disminución de las manifestaciones políticas de estudiantes y obreros— y ganó importancia como instrumento de represión de las actividades ilegales del narcotráfico y la subversión”. <http://www.elspectador.com/impreso/politica/articuloimpreso43317-un-un-pais-de-estados-de-excepcion>, consultado el 23 de noviembre de 2012.

2 Para ilustrar con cifras la situación de violencia en la época que nos concierne, Astrid Martínez señala que “[e]l crecimiento del narcotráfico vino acompañado de un aumento notable de los homicidios y los secuestros. Entre 48 países en desarrollo (...), Colombia mostró la mayor tasa de homicidios intencionales 77.5/100.000 habitantes. (...) Entre 1985 y 1998, el promedio anual de muertes causadas por el conflicto armado fue de 120, con tendencia creciente. En ese periodo hubo 14.000 acciones armadas: toma de poblaciones, sabotajes, contactos entre los grupos armados y las fuerzas armadas, piratería y hostigamientos; hubo veinte mil muertos por el conflicto (...)”. MARTÍNEZ ORTIZ, Astrid, *Economía, crimen y conflicto*, Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Antropos, Bogotá, 2001, p.12.

3 Se utilizarán los dos nombres. El de Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta se reconoce en los textos académicos e históricos y el segundo, *Todavía podemos salvar a Colombia*, fue un elemento de identidad que surgió del aviso publicado en el periódico *El Tiempo*, del 22 de octubre de 1989, en el que los estudiantes comenzaron a reconocerse con este eslogan, como líderes de la *Marcha del silencio* y de la campaña del *Plebiscito para el plebiscito*.

4 Lo anterior, conforme a lo que al respecto exponen autores como Robert Dahl, en sus textos sobre Poliarquía; Davenport Christian en *State repression and the domestic democratic peace*; Daron Acemoglu y James Robinson en *Economic origins of dictatorship and democracy* y North *et al.*, en *Violence and social orders*. Estos autores analizan la tesis desde la que se asume que a mayor democratización menor represión por parte del Estado, cada uno desde un modelo analítico particular, pero de todos ellos se deriva que los procesos de democratización evidencian movimientos en los que en los Estados se generan escenarios institucionales que posibilitan el debate público abierto y que incluyen a grupos. Para que esto sea posible, estos sistemas tienden a aplicar los criterios procedimentales de la democracia, entre ellos se destaca la posibilidad de manifestar las demandas, de proponerlas desde la libertad de expresión, información e igualdad de oportunidades para quienes participan en la esfera política.

cuestros, desapariciones, etc., que caracterizaban el diario vivir de los colombianos.

Algunas de las razones del surgimiento del movimiento fueron: responder a los hechos violentos vividos por el país a finales de la década de los ochenta, las particulares características institucionales y la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y reformar la Constitución de 1886. Conforme a los eventos históricos, el análisis presentado tendrá un límite temporal comprendido entre 1989 y 1991, segmentado en dos momentos: 1. Surgimiento del movimiento y 2. Desarrollo y culminación del movimiento.

El trabajo se desarrollará en cuatro partes: en la primera se pretende ubicar al lector conceptualmente, es decir, se definirá la protesta social en términos generales, y se realizará una breve contextualización para explicar cómo esta se presentó en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. En la segunda parte, se presentará una breve descripción del movimiento y se explicará como un caso particular de protesta social. En la tercera parte, se ilustrará con ejemplos de prensa concretos por qué no existió represión por parte del Estado contra el movimiento, aunque tuvo opositores que querían mostrarlo como una forma de insubordinación frente al *status quo* representado por la Carta Política de 1886. Finalmente, se desarrollarán algunas conclusiones sobre el tema planteado.

I. PRIMERA PARTE. ALGUNOS APUNTES SOBRE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA

A. Ubicación conceptual

Para diversos autores que escriben sobre protesta social en América Latina⁵, esta se relaciona con las manifestaciones ciudadanas que toman alguna de las siguientes formas: huelgas, marchas, tomas, demostraciones públicas, entre otras⁶. Se asume que estas manifestaciones son realizadas por parte de trabajadores, campesinos, estudiantes y ciudadanos en general, cuando quieren expresar que no están de acuerdo con el proceder del Estado, con las normas o políticas públicas establecidas, con sus consecuencias o con elementos de las políticas sociales o económicas que inciden en su vida cotidiana. De hecho, la protesta social forma parte del ejercicio de derechos humanos como los que se encuentran establecidos en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo contenido se presenta a continuación⁷:

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de re-

5 Al respecto, ver BERTONI, Eduardo, (compilador), *¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina*, Facultad de Derecho, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2010.

6 Hay quienes incluyen los conflictos armados y las guerras civiles y revolucionarias, pero para efectos del presente trabajo, nos limitaremos a aquellas manifestaciones de la protesta social que por su origen pretenden ser pacíficas.

7 <http://www.un.org/es/documents/udhr/>, consultado el 17 de noviembre de 2012.

ligión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

De las normas mencionadas se deriva que, como dicen Uprimny y Sánchez, “(...) protestar es un derecho y (...) quienes protestan deben ser tratados como ciudadanos, no como delincuentes ni mucho menos como enemigos”⁸. Así mismo, se puede señalar que la protesta social es un derecho que se desarrolla a partir de la interacción entre la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestarse y el derecho a la información⁹.

Por su parte, para autores colombianos como Marcela Velasco Jaramillo, la protesta social surge como consecuencia de la pérdida de la capacidad estatal para contener las respuestas ciudadanas o para garantizar el bienestar y los derechos de los individuos, lo cual, en términos concretos, hace referencia a la inseguridad socioeconómica y política y a la inhabilidad de las instituciones para someter a los actores contestatarios y obligarlos a seguir las normas. Así mismo, para la autora la protesta social es el resultado del deterioro de las capacidades ciudadanas para acceder a los recursos políticos y económicos que les permitan desarrollar políticas públicas¹⁰. Por su parte, algunos autores, como Santana y Leal, han asociado la protesta social con la descentralización política. Archila la asocia con la debilidad de la sociedad civil y Urrutia con la falta de acción eficiente por parte de los mecanismos de representación¹¹.

En todo caso, podría afirmarse que los autores mencionados coinciden con teóricos políticos como Gilhodes, Pécaut y Zamosc, en que la protesta social responde a la necesidad de la ciudadanía de manifestarse frente a situaciones de pobreza, crisis económica, inequidad social, violencia, concentración de la riqueza y del poder. Ejemplos concretos de lo anterior están en las acciones y peticiones de los movimientos estudiantiles y sociales españoles y latinoamericanos durante el 2011, frente a la crisis económica global; las que se derivaron del movimiento

8 UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, “Colombia. Derecho penal y protesta social”, en: BERTONI, Eduardo, (compilador), *¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina*, Facultad de Derecho, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2010, pp. 47-74, 73.

9 Otras normas internacionales relevantes en el tema son: artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

10 VELASCO JARAMILLO, Marcela, “Cambio institucional y protesta social en Colombia 1964-2000: análisis de series de tiempo”, *Revista Colombia Internacional* 63, ene.-jun., 2006, pp. 70-87: 71.

11 *Ibid.* Recuento teórico tomado de y elaborado por Velasco Jaramillo.

denominado Occupy Wall Street, frente a la crisis económica de los últimos años que consideran ha dividido el mundo entre el 1% que tiene en sus manos la riqueza y el 99% restante; y las del movimiento de la Primavera Árabe, en contra de los líderes dictatoriales de Egipto, Túnez y Libia, entre otros.

En este contexto, la protesta social se puede entender como una manera de construir ciudadanía a partir del ejercicio de la libertad de expresión y de manifestaciones contestatarias que cuestionan las acciones del Estado. En palabras de Velasco Jaramillo, los actores de la protesta social, entre los cuales, como ya se mencionó están los estudiantes, “(...) defienden derechos sociales y políticos previamente adquiridos, y buscan reformar y democratizar al estado”¹². Un elemento importante que menciona la autora es que, muchos de los actores ciudadanos de la protesta social reconocen en el Estado una institución para formalizar derechos y reclamos. Por su parte, las élites estatales pueden responder de forma positiva acogiendo propuestas y democratizando o por el contrario, de forma negativa, reprimiendo a los actores sociales¹³.

En síntesis, la protesta social es un derecho humano, cuyo ejercicio se presenta y expresa de forma colectiva y constituye una manera de cuestionar o de responder frente a la presencia —o ausencia— de acción del Estado. Si bien no es posible afirmar que con la protesta social se hace justicia, sí es factible señalar que la protesta social puede entenderse como una

respuesta no formal, aunque claramente democrática, para buscar justicia, que va más allá de las alternativas que brinda el sistema jurídico. La protesta social, entonces, podría ser parte de las estrategias de la justicia popular, entendida como el conjunto de “(...) acciones ejercidas por personas que se organizan y crean mecanismos de justicia independientes y autónomos al sistema judicial”¹⁴.

Las acciones que se derivan de la protesta social pueden diferenciarse entre pacíficas y violentas. El presente texto se centrará en aquellas expresiones de carácter pacífico, asumiendo que:

[c]uando las personas deciden prescindir de la fuerza pública y de las autoridades judiciales como referentes de regulación de sus disputas, pueden generar alternativas de resolución y control social ejecutadas por ellas mismas. Estas acciones pueden ser una ejemplificación de una sociedad que opta por “soluciones autónomas, pacíficas y democráticas para la resolución de sus conflictos” (Santos, 2001: 150)¹⁵.

Adicionalmente, se puede afirmar que el concepto de la protesta social está articulado con los elementos básicos que los Estados tienen que enfrentar cuando se dirigen hacia la democratización: el debate público y la inclusión social dirigida hacia la participación política¹⁶. De

¹² *Ibid.*, p. 72.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ MAHECHA ARANGO, Natalia, *Linchamientos, crimen y protesta: justicia popular en Colombia (1990-2010)*. Documentos CESO (Centro de Estudios Socioculturales e internacionales), No. 187, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011, p. 7.

¹⁵ *Ibid.*, p. 8.

¹⁶ Para mayores referencias bibliográficas, ver el programa de la clase Represión y Democracia, desarrollado durante el segundo semestre

esta mirada frente a la protesta social se deriva un elemento claro de la actuación estatal para mantener su estatus y evitar el desbordamiento de la protesta: es un momento en donde la represión puede tener protagonismo, conteniendo, silenciando o criminalizando las manifestaciones ciudadanas públicas.

Respecto a la criminalización de la protesta social es importante señalar que las normas internacionales, como las mencionadas previamente, y domésticas actualmente vigentes, señalan que el marco de acción de esta no debería tener más limitaciones que las que impone la protección de los derechos que se amparan (libertad de expresión, manifestación e información) y la ley. Así mismo, se establece que si son pacíficas no deberían ser contenidas, aunque puedan estar reguladas. Esto implica que en el marco de los Estados democráticos y de derecho, la protesta social *no debería ser criminalizada ni reprimida* por el Estado. Lo anterior incluye evitar no solo las sanciones penales que se pueden derivar de darles a las manifestaciones de protesta el tratamiento criminal, sino de ejercer acciones represivas por parte del Estado. En este sentido, se acoge la definición de Christian Davenport sobre represión:

By this, I am referring to very specific types of government activity: restricting civil liberties (for example, political bans and instances of censorship) and violating personal integrity rights (for example, torture, disappearances, and mass killings)¹⁷.

de 2012, en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional, por el profesor Francisco Gutiérrez.

17 DAVENPORT, Christian; JOHNSON, Hank; MUELLER, Carol, (eds.), *Repression and mobilization*, University of Minnesota Press, 2005, p. 15.

El caso del Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia* resulta interesante para el análisis bajo la anterior perspectiva, porque, como se demostrará, este se presenta en un contexto de libertades limitadas constitucional y políticamente, en un escenario plagado de acciones violentas como asesinatos, masacres y actos terroristas. Es en estas circunstancias precisamente que logra desarrollarse y concretar resultados ampliamente democratizantes, por lo menos teóricamente: una nueva Carta Política para Colombia, caracterizada por contener una amplia gama de derechos y libertades individuales y colectivas y acciones para su protección, como la tutela¹⁸.

B. Contexto político-normativo de la protesta social en la segunda mitad del siglo XX en Colombia

En el caso colombiano, y específicamente durante la segunda mitad del siglo XX, algunas razones que incidieron en la represión de la protesta social fueron: el casi ininterrumpido estado de sitio y las acciones que se derivaron de la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982).

Respecto a estas dos situaciones, Uprimny y Sánchez señalan en relación con el primero (estado de sitio): “(...) bajo su amparo, las graves restricciones o incluso las suspensiones totales de los derechos individuales y la represión de la protesta social se convirtieron en rasgos característicos de la vida política. Protestar en

18 En el régimen norteamericano, se le conoce como *Writ of protection*, pero no tiene el mismo alcance que la acción de tutela en nuestro país.

este contexto era un delito no un derecho”¹⁹; y frente a la segunda, (aplicación del Estatuto de Seguridad, expedido en 1978), vale la pena destacar que se tipificaron como delitos “la perturbación del orden público, la alteración del pacífico desarrollo de las actividades sociales y la ocupación de lugares públicos o privados para presionar decisiones de las autoridades”²⁰. Así mismo, durante el régimen de Turbay Ayala (1978-1982), “los paros cívicos, las huelgas, las movilizaciones en las ciudades y en el campo [fueron] drásticamente reprimidos en un proceso donde no [había] ninguna garantía al derecho de defensa. (...)”²¹.

Por su parte, en la Constitución de 1886, artículo 46, solo se consagraba el derecho a reunirse pacíficamente e incluso, se establecía que las autoridades podían disolver toda manifestación que pudiera llegar a ser asonada o tumulto, o que obstruyera las vías públicas²². En contraste con este escenario, en la Constitución de 1991, consecuencia de la acción del movimiento estudiantil objeto de estudio, se estableció que la protesta social pacífica no puede ser criminalizada, ni siquiera en estados de excepción²³.

19 UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, *op. cit.*, p. 47.

20 *Ibid.*, p. 47.

21 CUÉLLAR, María Mercedes, *Los sindicatos y la asignación del ingreso en Colombia: un siglo de historia laboral*, Primera edición, Ediciones Universidad de los Andes, Bogotá, 2009, 202 p.

22 UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, *op. cit.*, p. 48.

23 La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 213 que: “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de

Aunque los delitos de asonada y rebelión continúan vigentes, el propósito de ellos no es, ni podría ser, reprimir la protesta social, sino la penalización del uso de medios violentos no legítimos. La protección es sobre la protesta pacífica. Es así como actualmente, contrario al régimen constitucional del 86, las manifestaciones que se derivan de la protesta social se encuentran consagradas como derechos con rango constitucional en los artículos 37 (libertad de reunión y manifestación), 39 (libertad sindical), 56 (derecho a la huelga); todos ellos a su vez, en el marco del artículo 20 que establece la libertad de expresión.

Retomando el escenario en el que ocurrió la protesta social durante la segunda mitad del siglo XX, es importante destacar que, además de lo señalado, la violencia se exacerbó durante la década de los ochenta. En materia de cifras, señala Alejandro Gaviria que entre 1980 y 2000, la tasa de homicidios en el país fue tres veces más alta que en países particularmente violentos como Brasil y México y siete veces mayor a la de Estados Unidos. Así mismo, en ciudades como Medellín, las cifras de homicidios alcanzaron a ser de 400 asesinatos por cada 1.000.000 de habitantes. Por otro lado, es fundamental tener en consideración que “[e]l asesinato no fue la única modalidad criminal que se disparó durante los años ochenta. Los secuestros, el robo de

noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos (...)”. A su turno, en el artículo 214, se señala que durante los estados de excepción: “(...) 2. [n]o podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario (...)”.

autos, los asaltos bancarios y hasta los delitos menores aumentaron en forma significativa en el mismo período de tiempo”²⁴. Lo sustenta la existencia de un escenario cotidiano violento, en donde la protesta social era blanco de las mismas acciones que vivía el resto de la población pero con el agravante de ocurrir en la arena pública.

En otras palabras, en el caso colombiano, la protesta social en el periodo histórico que nos concierne (1989-1991) estuvo enmarcada en el conflicto armado interno²⁵, así como en las demás formas de violencia, lo que hace que a veces haya resultado difícil diferenciar acciones ciudadanas con propósitos netamente pacíficos de otras que podrían tener incidencia en el accionar de grupos al margen de la ley²⁶. En todo caso, lo que es claro es que el movimiento estudiantil se presentó en el marco legal restrictivo de la Constitución de 1886 y no en el que resultó de su propio esfuerzo democratizante.

24 GAVIRÍA, Alejandro, “Rendimientos crecientes y evolución del crimen violento: el caso de Colombia”, en: MARTÍNEZ ORTIZ, Astrid, *Economía, crimen y conflicto*, Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Antropos, Bogotá, 2001, pp. 159 y 160.

25 *Ibid.* Una definición de conflicto armado interno, que resulta relevante para efectos de entender el contexto en el que se desarrollaba la protesta social en Colombia, es el elaborado por Juan Carlos Echeverry y otros, en el capítulo titulado “El conflicto colombiano en el contexto internacional”, en el que se considera como: “[e]nfrentamiento entre grupos organizados, que resulta en número considerable de muertos”. En: MARTÍNEZ ORTIZ, Astrid, *Economía, crimen y conflicto*, Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Antropos, Bogotá, 2001, p. 83.

26 No obstante lo anterior, vale la pena considerar que, conforme a lo que señalan Juan Carlos Echeverry y otros, respecto al inicio del recrudecimiento del conflicto interno armado (que se agudiza a partir de 1984 y que en su estudio va hasta el 2000), diferenciándolo de la etapa de la Violencia con mayúscula (1948-1962), las cifras permiten afirmar que, si bien el conflicto armado interno colombiano es uno de los más extensos del mundo (sumando las dos etapas mencionadas y ocupando así el cuarto lugar, al lado de Filipinas, Uganda y Guatemala), no es tan intenso conforme a las tasas de homicidio. *Ibid.*, pp. 96 a 98.

En este contexto, y como se sustentará a lo largo del texto, resulta paradójica la ausencia de represión contra el movimiento estudiantil, dado que la hipótesis reinante respecto a la protesta social consiste en que “[l]a situación de criminalización de la protesta social en Colombia varía de conformidad con la tendencia imperante en cada momento histórico. Así, en momentos en los que se privilegia la búsqueda de la derrota de los insurgentes, la criminalización de las protestas tiende a ser mayor”²⁷. En los ochenta había una guerra de todos contra todos, pero el hecho contundente consistía en que la víctima principal de todos los actos violentos era la población civil y, particularmente, ciudadanos y ciudadanas que por su rol pudieran ser catalogados como potencialmente peligrosos para algún actor violento, por su posición política o el papel público que desempeñaban.

Finalmente, vale la pena señalar que en estudios estadísticos como el de Velasco Jaramillo, la época que nos ocupa (1988-1991) no es considerada como un pico de la protesta social, aunque hay vacíos en el análisis de la información respecto al movimiento estudiantil y frente a la promulgación de la Constitución de 1991: no se presentan referencias específicas ni a uno ni a otro. No obstante lo anterior, según la autora se presentó un pequeño pico durante 1985 y 1987, y después menciona que hubo protestas en los ochenta por la crisis política y violaciones de derechos humanos, pero sin concretar cuándo, lo cual no parece muy coherente si se considera que hubo un movimiento estudiantil que motivó un fuerte proceso de democratiza-

27 UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, *op. cit.*, pp. 47-74, 66.

ción. Es decir, no se dice nada en particular sobre el movimiento estudiantil y su alcance. Por otra parte, la autora señala que las capacidades ciudadanas llegaron a su punto más alto entre 1991 y 1994, lo cual nuevamente parecería tener relación con la nueva Carta Política, pero esta no se menciona como un elemento potencializador de las anteriores.

En síntesis, la protesta social en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX y, particularmente, durante la década de los ochenta, se presentaba en un escenario restrictivo de derechos y de criminalización normativa. Así mismo, se puede afirmar que era un blanco fácil, tanto de la represión estatal como de cualquier otro tipo de violencia de aquellas que vivía el país de forma cotidiana.

II. SEGUNDA PARTE. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA SÉPTIMA PAPELETA O *TODAVÍA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA*, COMO UN EJEMPLO DE PROTESTA SOCIAL

A. *Los catalizadores del movimiento: el dolor y la sangre*

En el escenario que se ha venido describiendo es relevante incluir otros antecedentes, como la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, el asesinato de cuatro candidatos presidenciales en menos de tres años y el auge que fue tomando el paramilitarismo, y que en los 90 se reflejaría en acciones represivas contra la población civil, particularmente contra profesores y personajes públicos asociados con la izquier-

da o simplemente contra aquellos con una mirada crítica frente al gobierno de turno²⁸.

Así mismo, no se debe olvidar que la guerra contra el narcotráfico y el narcoterrorismo —que pese a los esfuerzos por controlarlos no lograba tocar a los grandes capos—, iniciada con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), se había convertido en un verdadero “baño de sangre”²⁹. A pesar de ello, tampoco se puede perder de vista que la violencia en Colombia no podía ni puede ser entendida únicamente como el resultado de la actividad de traficantes de droga y de grupos guerrilleros. En efecto, se considera que más del 80% de los homicidios fueron manifestación de una violencia amorfa que no estaba relacionada con organizaciones criminales³⁰. La guerra era contra todos: contra los guerrilleros, contra los narcotraficantes, contra la población civil, contra cualquiera que pudiera ser catalogado como enemigo potencial. Un ejemplo que ilustra lo anterior fue *la crónica de muertes anunciadas* de personajes públicos como el entonces Procurador Carlos Mauro Hoyos, quien en declaración a la prensa el 25 de noviembre de 1987, dos meses antes de su asesinato, señaló por los medios que todos los días recibía listas de asesinatos, amenazas, agresiones y desapariciones, que lo llevaron a preguntarse: “¿Qué es esto? Esto no es una de-

28 LEAL BUITRAGO, Francisco, “Estructura y coyuntura de la crisis política” en: QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, Sociología e historia del movimiento estudiantil por la Asamblea Constituyente de 1991, *Revista Colombiana de Sociología*, ISSN 0120-159X, vol. VII, Número 1 de 2002, pp. 125, 151.

29 CALVO OSPINA, Hernando, *Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado*, capítulo VIII, Foca, ediciones y distribuciones generales, S. L., Madrid, 2008.

30 ECHEVERRY, Juan Carlos, *op. cit.*, p. 164.

mocracia, esto no es un país. Esta es la ley de la selva”³¹. Otro ejemplo demostrativo se concretó cuando en noviembre de 1987, la Comandancia General de las fuerzas militares aprobó el Reglamento de Combate de Contraguerrillas, en el que se dividió la subversión entre la de la población civil insurgente y la de los grupos armados. La población civil insurgente estaba conformada por “los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos, etc.” [De hecho], las huelgas, los paros, los movimientos de protesta fueron catalogados como “acciones políticas” de la población civil insurgente”³².

Respecto a las masacres, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), para 1988, registró 108 masacres, la peor cifra de la década; conforme a Amnistía Internacional, el móvil era el de asumir que todo civil que residiera en una región con operaciones guerrilleras era un objetivo legítimo³³.

En medio de este escenario ocurrió la muerte del dirigente del Partido Liberal y candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989. Sin pruebas contundentes el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), señaló como autor del crimen a Pablo Escobar Gaviria; hoy en día sigue siendo uno de los crímenes sin resolver que evidencia la impunidad de la justicia durante ese tiempo. Este hecho fue el detonante del movimiento estudiantil, como se verá a continuación.

B. El Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta o Todavía podemos salvar a Colombia

El Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia* se puede considerar como un promotor de movilización de protesta social, por dos razones: primera, porque logró convocar la participación de estudiantes de universidades públicas y privadas que ejercieron de forma colectiva sus derechos a la libertad de expresión, manifestación e información y con sus acciones lograron sentar las bases de la Constitución Política de 1991; segunda, porque el carácter coyuntural del movimiento fue una reacción frente a la situación de violencia enfrentada por el país, un llamado al Estado y a las instituciones, un llamado a la democracia.

El movimiento estudiantil se manifestó públicamente —y sin organización como movimiento—, por primera vez, en la *Marcha Estudiantil del Silencio* hacia el Cementerio Central, que tuvo lugar el 25 de agosto de 1989, una semana después del magnicidio de Luis Carlos Galán³⁴. La marcha tuvo como propósito rechazar la violencia terrorista, con el lema “*Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa*”³⁵. En el comunicado que leyeron al llegar al cementerio, los estudiantes señalaron, entre otras cosas:

31 OSPINA CALVO, Hernando, *op. cit.*, p.170.

32 *Ibid.*, p.178.

33 *Ibid.*, p. 178.

34 “La quijotada de la séptima papeleta”, revista *Cambio*, N°. 418-21/06/01. Publicado el 22 enero de 2010 por 7 papeleta, consultado en: <http://fundacionseptimapapeleta.wordpress.com/2010/01/22/la-quijotada-de-la-septima-papeleta-revista-cambio-nº-418-210601/>, consultado el 3 de noviembre de 2012.

35 <http://www.banrepultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2003/inedito.htm>, edición 162, junio de 2003, consultado el 19 de noviembre de 2012.

i) El rechazo a todo tipo de violencia, ii) respeto de los Derechos Humanos, iii) apoyo a instituciones democráticas en contra de fuerzas desestabilizadoras (guerrilla, narcotráfico, paramilitares etc.), iv) rechazo de cualquier intervención armada extranjera, v) reforma de algunas instituciones para conjurar la crisis, vi) exigir depuración de Fuerzas Militares, Policía, Gobierno y partidos políticos, vii) conformación de un frente unido para formular propuestas de salida a la crisis³⁶.

En respuesta a lo anterior, el presidente Virgilio Barco envió un telegrama de agradecimiento a los estudiantes en el que decía: “(...) sus voces de aliento constituyen un importante estímulo para continuar la lucha contra el delito y la defensa de las instituciones republicanas. Por nuestros hijos, por nuestras familias y por Colombia vamos a salir adelante (...)”³⁷, lo cual evidenciaba si no un apoyo concreto, por lo menos la aprobación del alto gobierno respecto al accionar del movimiento.

Durante el primer encuentro, los estudiantes señalaron que no se volverían a quedar callados. Uno de los primeros temas en la agenda de acción era la posibilidad de organizar un movimiento estudiantil con estructura, que asumiera el liderazgo para la defensa de las ideas planteadas en la *Marcha del silencio*. Algunos autores afirman que, pese a lo que decían los medios y a los esfuerzos estudiantiles, no había tal movimiento, dado que la manifestación había sido

un hecho espontáneo³⁸. No obstante lo anterior, los estudiantes continuaron trabajando por consolidar el Frente Unido Estudiantil de Colombia (FUEC)³⁹, que sería su órgano de representación y el escenario político para presentar propuestas. Con este propósito, y con el apoyo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, se convocó a estudiantes de todas las universidades, para organizarse en mesas de trabajo. Nuevamente, se presenta el ejercicio de los derechos que envuelven la protesta social.

El movimiento no se estructuró formalmente y, de hecho, el desorden fue una de sus formas de funcionamiento. De los muchos que comenzaron quedaron pocos, pero uno de los rasgos de su actuación era la necesidad de presentar un punto de vista, con la posibilidad de una estrategia de solución. Paralelamente, había un grupo de estudio sobre las medidas del gobierno Barco, que sesionó durante la noche del asesinato de Galán, amparado en el estado de sitio, liderado entre otros por Fernando Carrillo⁴⁰.

También caracterizó al movimiento la sensación de reconciliación que se derivaba de sus accio-

36 QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, *op. cit.*, p. 127.

37 *Ibid.*, p.128.

38 TORRES FORERO, César Augusto, “De las aulas a las urnas. La Universidad del Rosario, la Séptima papeleta y la Constituyente de 1991”, *Colección Textos de Jurisprudencia*, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, p. 32.

39 QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, *op. cit.* El Acta de fundación tiene fecha de 9 de septiembre de 1989 y está firmada por estudiantes de universidades como: América, Andes, Distrital, Externado, Gran Colombia, Javeriana, Nacional, Sabana, Pedagógica, Santo Tomás y Sergio Arboleda.

40 Al respecto, destaca Carrillo, se presentaron medidas como: extradición por vía administrativa de narcotraficantes, incautación de bienes, detención de capos, prisión a los testaferros de narcotraficantes, entre otras. “La Séptima Papeleta o el origen de la Constitución de 1991”, en: *La Séptima Papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas*, Colección textos de jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario, 2010, p. 23.

nes, la cual le dio estatus. Al referirse al mismo, en octubre de 1990, se decía: “[h]a triunfado la voluntad de reconciliación nacional del pueblo colombiano. Esta es una decisión histórica y trascendental”⁴¹. Por otro lado, cabe resaltar que uno de los rasgos sobresalientes del movimiento estudiantil, entendido como manifestación de la protesta social, es que surgió en un contexto en el que se consideraba que los jóvenes colombianos eran apáticos e indolentes. En un artículo titulado “*Los estudiantes de la séptima papeleta*”, la revista *Semana*, en edición de marzo de 2006, señala: “(...) no había movimientos que agruparan a grandes números de estudiantes. No había ninguna organización que los representara, no había movilización masiva ni politización a gran escala, ni la sospecha o esperanza de que eso fuera posible”⁴². Es precisamente por ello que el movimiento estudiantil, como ejercicio de la protesta social en Colombia, resulta relevante.

C. Las acciones del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta o Todavía se puede salvar a Colombia como expresión de la protesta social

Evidentemente, con o sin estructura formal, el movimiento estudiantil fue una manifestación de la protesta social, es decir, constituyó un ejemplo del ejercicio de un derecho humano, de aplicación colectiva, y se presentó como una

forma de construir ciudadanía a través de acciones que se oponían a la violencia y que estaban encaminadas a generar un cambio del *status quo*, representado por la Constitución de 1886: manifestaciones públicas que evidenciaban el descontento de una parte de la población frente a lo que acontecía. En igual sentido y en medio de una violencia generalizada y exacerbada, el movimiento no dejó de reconocer al Estado, sino todo lo contrario, quería formalizar una reforma constitucional para transformarlo.

En este caso particular, las élites acogieron las propuestas y no silenciaron la voz del movimiento. De hecho, en un artículo de prensa se evidenció una siguiente reacción por parte del movimiento estudiantil, que retaba a quienes no participaban: “*Todavía Podemos Salvar a Colombia se dirigió también en el mismo sentido a Gaviria [dando] la impresión de que quien no ha participado en los debates electorales es un minusválido mental cuyas propuestas son poco o nada interesantes*”⁴³.

En esta medida, se puede inferir que el movimiento era pro-participación democrática, incluso hasta catalogar a quien no participara como un actor con discapacidad para elaborar propuestas. Aquellas que se derivaron del accionar del movimiento pueden concretarse en las siguientes: La *Marcha del silencio*, el plebiscito para el plebiscito y, finalmente, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. De hecho, y pese

41 GARCÍA, Wilson, “Movimiento Estudiantil por la Constituyente”, *El Tiempo*, Sección Otros, fecha de publicación: 11 de octubre de 1990, en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-15375>, consultado el 19 de noviembre de 2012.

42 <http://www.semana.com/nacion/estudiantes-septima-papeleta/135928-3.aspx>, consultado el 3 de noviembre de 2012.

43 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3253>, fecha de publicación: 9 de noviembre de 1990, consultado el 19 de noviembre de 2012.

a lo confuso que puede resultar, la convocatoria a la Asamblea es lo que se ha denominado la Séptima Papeleta, que primero se conoció como *El voto por Colombia*⁴⁴.

Para ilustrar las acciones, a continuación se presenta el aviso de prensa, pagado y publicado por estudiantes de la Universidad del Rosario en el diario *El Tiempo*, el domingo 22 de octubre de 1989. El fragmento es tomado del texto de César Augusto Torres Forero, *De las aulas a las urnas. La Universidad del Rosario, la Séptima papeleta y la Constituyente de 1991*, pp. 42 y 43.

4. El plebiscito por el plebiscito

CIUDADANO COLOMBIANO

TODAVIA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA

Si usted quiere participar en la solución de los problemas nacionales, firme con su nombre y número de cédula esta propuesta y envíela al Apartado No.022678 de Bogotá. Su respuesta será remitida al señor presidente de la República, como apoyo a esta iniciativa.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL QUE PROMOVIÓ LA MARCHA DEL SILENCIO. REALIZADA EN BOGOTÁ EL 25 DE AGOSTO DE 1989

Frente a la crisis generalizada que atraviesa la Nación y ante la incompetencia de la clase política para dar respuesta a los graves problemas del país, se hace necesario que la ciudadanía asuma su responsabilidad en la búsqueda de las soluciones que las circunstancias exigen.

Los abajo firmantes, convocados por la juventud colombiana, ajenos a cualquier propósito partidista, burocrático o sectario, sin intereses económicos particulares, y motivados únicamente por la búsqueda del bien común, por una futura Colombia gobernada por la moral, la justicia integral sobre la base de los principios democráticos y el respeto a la dignidad humana, en un medio de progreso, paz y autodeterminación, solicitamos a Usted señor presidente disponga de los instrumentos necesarios para la convocatoria de un **PLEBISCITO** con el fin de que la nación se manifieste sobre los siguientes puntos:

Adopción de los sistemas PLEBISCITO y REFERENDUM como mecanismos de reforma de la constitución.

Eliminación de los auxilios parlamentarios.

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para que estudie y se pronuncie sobre las siguientes reformas a la Constitución:

Reforma del Congreso. De las aulas a la urnas

Reforma de régimen de derechos civiles, derechos humanos y garantías sociales.

Reforma de administración de justicia.

Reglamentación de los estados de excepción (estado de sitio y Emergencia económica).

Reforma de los mecanismos de planificación de la economía.

Ampliación de los mecanismos de la descentralización administrativa.

INICIATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DEL ROSARIO, ANDES, JAVERIA-

44 QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, *op. cit.*, p. 129.

NA, EXTERNADO, JORGE TADEO LOZANO, GRAN COLOMBIA, EL BOSQUE, SERGIO ALBOLEDA, SABANA, LA SALLE, CESA, NACIONAL.

SI USTED ESTA DEACUERDO CON LO ANTERIOR, FIRME Y ANOTE SU NUMERO DE CEDULA EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS

NOMBRE FIRMA CEDULA

_____
_____

En este contexto, y pese a que el primer intento de los estudiantes por recolectar firmas ciudadanas para un plebiscito no logró los resultados esperados, consiguió finalmente que en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 1990 se incluyera una papeleta en que los electores pudieran responder sí o no a la convocatoria de una asamblea para reformar la Constitución Política⁴⁵.

El tarjetón decía lo siguiente:

Tomado de González Posso, Camilo, "La séptima papeleta", revista Semana, en: <http://www.semana.com/nacion/septima-papeleta/153407-3.aspx>, el 27 de noviembre de 2012.

45 "El plebiscito de la séptima papeleta", *Credencial Historia*, N° 159, marzo 2003, en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2003/inedito.htm>, consultado el 2 de diciembre de 2012.

Por lo anterior, la Séptima Papeleta, como hecho político, puede ser entendida como el punto de arranque del proceso de cambio constitucional. La evidencia muestra que no se puede negar que el Voto por Colombia fue inspirado y movilizó por el movimiento estudiantil y dio lugar "(...) a un proceso democrático que consistió en depositar un voto adicional, propio, en las elecciones parlamentarias y municipales de 1990, permitiendo a la ciudadanía pronunciarse en favor o en contra de una Asamblea Constituyente"⁴⁶.

Así mismo, se puede afirmar que gracias a las acciones del movimiento, se legitimó la Asamblea Nacional Constituyente, y aunque en la votación que la viabilizó también se presentó abstención, se obtuvieron "(...) unos resultados no espurios que al fin de cuentas superaron la barrera de los 3 millones de votos"⁴⁷. Cabe resaltar que ante la negativa de la Registraduría a realizar el conteo de votos, los estudiantes que eran parte del movimiento asumieron esta responsabilidad: durante la jornada electoral operaron en una bodega, allí realizaron la contabilización de los votos y desde allí emitieron un comunicado informando a la opinión pública que había un total aproximado de dos millones de séptimas papeletas⁴⁸.

46 <http://septimapapeleta.blogspot.com/>, consultado el 3 de noviembre de 2012.

47 D'ARTAGNAN, "Defensa de la 7a. Papeleta", *El Tiempo*, fecha de publicación: 5 de julio de 1991, en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-115488>, consultado el 19 de noviembre de 2012.

48 QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, *op. cit.*, pp. 125, 151: 130.

En todo caso, se puede afirmar que hubo más de dos millones de papeletas en favor de la propuesta y del proceso, que posteriormente fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia, lo cual trajo como consecuencia que el entonces presidente, Virgilio Barco, aceptara en las elecciones presidenciales de 1990, una votación adicional en la que el pueblo manifestara si quería un cambio constitucional. En ese escenario, en las elecciones presidenciales el 86 por ciento de los colombianos se pronunció a favor de la designación de la Asamblea Constituyente, cuyo resultado sería una nueva Constitución Política⁴⁹.

En síntesis, el movimiento estudiantil como un ejemplo de protesta social logró acciones democratizantes concretas: por un lado, el 11 de marzo de 1990, fecha en que la séptimas papeletas invadieron las urnas, legitimó el cambio constitucional y, por el otro, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual se concretó el 27 de mayo con su convocatoria en el tarjetón y meses más tarde, el 9 de diciembre, con la elección de sus integrantes. En palabras de Fernando Carrillo Flórez: “(...) ante todo, la séptima papeleta fue un grito de la ciudadanía que se resistió a continuar ver corriendo la sangre: primero de Galán después de Pizarro, de Jaramillo y de miles de colombianos”⁵⁰.

Con ello, se hace evidente que el movimiento estudiantil fue definitivo en todo el proceso y, de hecho, participó de forma concreta en las dife-

rentes etapas que llevaron a la expedición de la Constitución Política de 1991.

C. Culminación del movimiento: promulgación de la Carta Política de 1991

Los legados del movimiento fueron los siguientes: 1. La aprobación de la propuesta de cambio constitucional, con el apoyo del pueblo como constituyente primario, que se pronunció a través de la séptima papeleta; 2. La convocatoria y conformación de la Asamblea Nacional Constituyente; y 3. El apoyo al proceso de cambio constitucional, con participación de un estudiante en la Asamblea.

Después de la séptima papeleta la acción estudiantil vislumbró la posibilidad de generar una organización estudiantil a nivel nacional. Pese a ello, el movimiento se dividió en dos fracciones: Todavía podemos salvar a Colombia (TPSC) y el Movimiento Estudiantil por la Constituyente (MEC); el primero menos heterogéneo (más integrantes de universidades privadas) que el segundo (conservó más la diversidad que caracterizó la *Marcha del Silencio*). Aunque las diferencias eran más de forma que de fondo, hubo varias en relación con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Para todos era claro que debía estar constituida por todos los sectores del país, pero era difícil definir cómo conformarla y cómo lograr la representación equitativa, incluida la de los estudiantes. A partir de entonces la acción del movimiento dependió de la coyuntura del país⁵¹.

49 *Ibid.*

50 “La quijotada de la séptima papeleta”, revista *Cambio*, N.º. 418 - 21/06/01, en: <http://fundacionseptimapapeleta.wordpress.com/2010/01/22/la-quijotada-de-la-septima-papeleta-revista-cambio-nº-418-210601/>, consultada el 1 de diciembre de 2012.

51 QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, *op. cit.*, p. 132.

En septiembre de 1990, en Medellín, después de la elección presidencial de César Gaviria, se realizó el Segundo Encuentro Nacional Estudiantil por la Constituyente. El primero se había realizado en Bogotá, en mayo del mismo año. Para quienes participaron, el segundo encuentro resultó ser el inicio del fin del movimiento estudiantil. El centro de la disputa fue el rol que los estudiantes debían tener en la Asamblea Nacional Constituyente, que en todo caso, el Decreto 1926 de 1990, expedido por el gobierno entrante, había reglamentado en cuanto a la forma de elección de sus miembros y al temario de reforma constitucional. Finalmente, la votación de los estudiantes y la elección de los miembros, que se dio en diciembre de 1990, tuvo como consecuencia una sola curul: la de Fernando Carrillo⁵².

Para concluir, se puede afirmar que el movimiento estuvo presente en el proceso que, en menos de dos años, culminó con la sanción de una nueva Constitución el 4 de julio de 1991. Para muchos de quienes vivieron el movimiento, “(...) el proceso de 1991 no solo gozó de una gran legitimidad a partir de su convocatoria, sino que se trató de aprovechar al máximo como instancia de movilización, participación y debate popular”⁵³. Al respecto, D’Artagnan en su columna de *El Tiempo*, con fecha del 5 de julio de 1991 señaló:

(...) despotricar hoy contra lo que en su hora constituyó la séptima papeleta, después que ella fue acogida prácticamente por todos nues-

tros dirigentes públicos, resulta un despropósito tardío. Pues si bien es cierto que la Registraduría no contabilizó formalmente su caudal, sería injusto negar que la séptima papeleta se convirtió en la más genuina y poderosa expresión de voluntad de una masa que quería decir algo o muchas cosas simultáneamente”⁵⁴.

Así, es posible afirmar que el movimiento puede entenderse como un hito nacional, como uno de los acontecimientos de democratización más importantes del siglo XX en nuestro país y como un ejemplo para Latinoamérica. Igualmente, y aunque la identidad estudiantil y el carácter heterogéneo que caracterizó al movimiento en su surgimiento se fragmentó, no se puede negar que fue un ejemplo de construcción de percepción sobre un destino común⁵⁵ y de la potencialidad que la protesta social puede llegar a tener en el propósito de lograr un cambio social y en el ejercicio de derechos ciudadanos.

III. TERCERA PARTE. REACCIÓN DEL ESTADO FRENTE AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA SÉPTIMA PAPELETA O *TODAVÍA PODEMOS SALVAR A COLOMBIA*

En la revisión de prensa y de textos académicos se encontraron algunas expresiones desestimulantes de la protesta social del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia*, y casi ninguna evidencia de intentos reales por reprimirla. Uno de los

52 *Ibid.*, pp. 130-134.

53 “La quijotada de la séptima papeleta”, *op. cit.*

54 “Defensa dela 7a. Papeleta”, *op. cit.*

55 QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, *op. cit.*

pocos ejemplos se presenta a continuación y no podría realmente calificarse como acto de represión estatal ni afirmarse que estuviera dirigido directamente hacia el movimiento estudiantil, tampoco podría considerarse consecuencia directa de este. El fragmento que se presenta corresponde al artículo publicado por el periódico *El Tiempo*⁵⁶, el 21 de diciembre de 1990, bajo el título “Profesores de la U. Nacional protestan por violencia de ELN” en el que se narra una protesta de profesores de la Universidad Nacional, pero el texto es confuso frente a quiénes son los autores de los actos violentos:

Los profesores recuerdan que el 27 de noviembre pasado, en el atentado contra la residencia del vicerrector académico de la Nacional, Antanas Mockus Sivickas, dejaron ejemplares de un comunicado titulado: Las directivas de la Universidad Nacional, cómplices del asesinato de estudiantes. Agregan que el documento, reproducido en papel con membrete de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional (UCELN) (...), hasta el momento, no se ha desmentido que el atentado lo haya producido ese grupo guerrillero. Reiteran su rechazo al designio de convertir el campus universitario en arena de enfrentamiento militar con el Estado, expresado hace varios años, a propósito del uso de armas por parte de personas que operaban desde los predios de la Universidad. Dicen que una situación de amenaza armada compromete seriamente la continuidad misma de una universidad inerme, que no puede combatirla con instrumentos específicamente universitarios. Recuerdan que cuando la comunidad universitaria pierde el control de la marcha de la institución se producen hechos negativos como

la clausura de las residencias y la cafetería en 1984, (...) Los docentes también le manifiestan su preocupación por la virtual alianza entre grupos violentos que invocan razones políticas y los elementos descompuestos, que al amparo de una pretendida extraterritorialidad de la Nacional, prosperan en el usufructo del narcotráfico interno. Dicen que no son ajenos a otros peligros como el hostigamiento de la fuerza pública a la comunidad estudiantil y entienden la consternación de los estudiantes por la muerte de Alberto Guerra, alumno de agronomía, durante un enfrentamiento con dicha fuerza. Concluyen que no es realista ni coherente endosar a otras entidades la defensa de la Nacional y rechazan que otros sectores se arroguen una representación a la cual la comunidad universitaria no ha renunciado. (Subrayado fuera del texto)

En el artículo de *El Tiempo*, “Crónica del parto constituyente”⁵⁷, publicado el 1 de diciembre de 1990, se aprecian las diferentes miradas de actores estatales y de dirigentes políticos frente al movimiento estudiantil. Por ejemplo, reconoce que la *Marcha del silencio*, en la que participaron 35.000 estudiantes, sacudió a la opinión y conglomeró a la juventud para clamar por una nueva Constitución. Es pertinente anotar que este artículo es el único en donde realmente parece insinuarse un intento por silenciar al movimiento estudiantil.

Comenta la autora, que Fernando Carrillo —a quien se ha mencionado en varias oportunidades en el presente texto por ser uno de los

56 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-41800>, consultado el 1 de diciembre de 2012.

57 CABALLERO, María Cristina, “Crónica del parto Constituyente”, *El Tiempo*, Sección Otros, fecha de publicación: 9 de diciembre de 1990, en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-33518>, consultado el 1 de diciembre de 2012.

actores con mayor reconocimiento público del movimiento y de quienes ha narrado la historia en múltiples oportunidades—, aseguró que hubo dos personas claves en la divulgación de la iniciativa de los estudiantes: Juan Manuel Santos —quien trabajaba para *El Tiempo* como periodista y actualmente es Presidente de nuestro país—, por escucharlos y posteriormente escribir un editorial respaldando la séptima papeleta, y Francisco Santos, por entonces jefe de redacción del diario, al decidir publicarle, el 6 de febrero de 1990, el artículo “Una dinámica democrática” donde Carrillo explica el proyecto.

También registra que el 8 de febrero del mismo año, el entonces presidente Barco atendió al grupo de estudiantes en un encuentro en el que ellos le entregaron una carta con 35.000 firmas solicitando la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y que después jóvenes de diferentes universidades buscaron apoyo en los precandidatos, empezando con los liberales. El primero que respondió fue César Gaviria, “quien no dudó en hablar sobre la iniciativa estudiantil en sus discursos y autorizó agregar el lema de la séptima papeleta en sus vallas”⁵⁸.

El artículo comenta que, según Carrillo, Álvaro Gómez “les cerró la puerta en la cara y Jaime Castro les advirtió que eran unos ilusos pues, faltando tres semanas para la elección, no había nada qué hacer. El que peor nos trató fue Álvaro Leyva quien nos calificó de borrachos”⁵⁹. En igual sentido, a Carrillo le tocó renunciar a su cátedra en la Universidad Javeriana, porque le

dijeron que “estaba promoviendo una insubordinación contra la Constitución”.

Más adelante, la articulista afirma que “la papeleta llegó a estar muy empapelada; se llegó a divulgar que su simple inclusión podía anular el voto (hasta que el 27 de febrero la Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió esta versión”⁶⁰, y que según los estudiantes, el Congreso tampoco parecía apoyar la propuesta, puesto que el 9 de octubre cuando salió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia declarando exequible el decreto de convocatoria de la Constituyente, el Congreso había aprobado “una moción pidiéndole al Presidente que respetara la sentencia de la Corte porque estaban convencidos de que iban a tumbar la Constituyente”, en otras palabras, les salió el tiro por la culata.

Pese a lo anterior, continúa reconociendo el artículo, el movimiento estudiantil por encarnar algo independiente no generó grandes resistencias políticas, incluso personajes como el expresidente Alfonso López lo apoyó. En algunas oportunidades se criticó a Barco por no apoyarlo más, pero en su discurso de 10 de marzo de 1990, manifestó su apoyo a la séptima papeleta.

Además de los apartes de documentos incluidos o comentados a lo largo del texto, se traen a colación otros fragmentos, clasificados por categorías, que resultan ilustrativos de la forma en que el movimiento estudiantil se presentaba frente a la opinión pública y de los que se deriva que no hay rastros de represión estatal, aunque

58 *Ibid.*

59 *Ibid.*

60 *Op. cit.*

se infiera desaprobación frente al proceso por parte de quienes detentaban el poder:

1. Desinstitucionalización del país:

“Defensa de la 7a. Papeleta”. *El Tiempo*, Sección otros. Fecha de publicación: 5 de julio de 1991. Autor: D’ ARTAGNAN. [En línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-115488>, consultado el 19 de noviembre de 2012:

Ahora la gente se apresta a observar lo que será el desenlace de la Constituyente: un escenario que, a pesar de la inexplicable prevención de algunos ilustres jefes, no condujo hacia la desinstitucionalización del país como tanto se temía sino, al contrario, a la reivindicación de las normas como base para manejar las relaciones de los asociados en una comunidad más o menos civilizada. (Subrayado fuera del texto).

2. Contra el cambio:

“Cambio 2000”. *El Tiempo*, Sección Otros. Fecha de publicación: 25 de mayo de 1993. Autor: Omar Flórez Vélez. [En línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-133132>, consultado el 19 de noviembre de 2012:

Tenemos una nueva Constitución para estimular el cambio que demanda la sociedad colombiana; no para frenarlo como cínicamente pretenden algunos representantes del viejo país en hacerle trampa y jugarle sucio, tratando de reformarla para volver a prácticas que hicieron tanto daño en el pasado y desacreditaron nuestras instituciones.

3. Incapacidad del pueblo:

“En Nueva Frontera, el ex presidente habla sobre la Constituyente, debemos hacer esfuerzos para evitar el caos: Lleras”. *El Tiempo*, Sección Otros. Fecha de publicación: 14 de octubre de 1990. Autor: NULLVALUE. [En línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-14453>, consultado el 19 de noviembre de 2012:

El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, en su editorial de la revista Nueva Frontera consideró que se podrían presentar caos y confusión en las iniciativas que presenten los miembros de la Asamblea Constituyente. Resulta absurdo pensar en que la mayoría de los electores colombianos estaría en capacidad de entender bien cada tema propuesto a su consideración.

En este mismo texto se muestra cómo el expresidente cuestiona la legitimidad del proceso, señalando que el mismo pasó por encima de la Carta Política que pretende ser reformada.

4. Avalando el proceso:

Como si fuera una respuesta frente al anterior texto, aparece el siguiente artículo:

“Constituyentes del 91”. *El Tiempo*, Sección Otros. Fecha de publicación: 16 de septiembre de 1990. Autor: NULLVALUE. [En línea], [HTTP://WWW.ELTIEMPO.COM/ARCHIVO/DOCUMENTO/MAM-57454](http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-57454), consultado el 2 de diciembre de 2012:

Por último: desvirtuar la legitimación de la Constituyente, con el argumento de que en un plebiscito es necesario obtener la mitad más uno del censo electoral para legalizar su representatividad, es una teoría peligrosa. Según la

misma, la elección del presidente Gaviria habría que cuestionarla porque solo obtuvo poco menos de cuatro millones de votos en los últimos comicios, con un potencial total que superaba los 13 millones de electores. En dónde está escrito que la Constituyente debe reunir determinado volumen de sufragios para reconocer su validez, cuando la opinión ya se expresó masivamente, en dos ocasiones, por su convocatoria? Lo otro sería aceptar que la abstención es la que manda la parada en nuestros debates democráticos.

Los fragmentos mencionados permiten deducir que, a pesar de las referencias a la desaprobación del proceso, no es realmente claro que esta se haya visto concretada en acciones de silenciamiento o de acallamiento del movimiento estudiantil. Adicionalmente, muchos de los textos hacen referencia al proceso constituyente más que al movimiento estudiantil. De hecho, los que hacen referencia a este último, en general avalan la iniciativa y la movilización como una propuesta legítima frente a la situación de violencia que afrontaba el país.

Así mismo, es preciso aclarar que muchos de los textos y apartes de prensa hablan de lo ocurrido, no de lo que estaba ocurriendo, por lo cual es difícil entender el alcance de los hechos desde narraciones *a posteriori*. También aparecen intentos por cuestionar el proceso, mucho más que por deslegitimar la acción de los estudiantes, lo que refuerza la idea que se viene desarrollando: no hubo represión estatal contra el movimiento estudiantil ni contra sus representantes y se trató de una protesta social que promovió la democratización, en un escenario en que, por la violencia y la crisis institucional, esto era poco probable.

IV. ALGUNAS IDEAS INCONCLUSAS

¿Tanta violencia y tanta democratización sin represión? Esta es la pregunta que queda luego de elaborar el presente trabajo. Las fuentes y documentos consultados no dejan rastros claros de acciones represivas contra el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia*.

No obstante lo anterior, es pertinente señalar que la búsqueda en prensa pudo haber sido más exhaustiva —lo cual deja un gran sinsabor en la autora, que entiende el presente análisis como un trabajo preliminar—, aunque la investigación fue rigurosa al revisar el archivo virtual de *El Tiempo*, primer diario del país en cuanto a circulación, la revista *Semana* y la revista *Cambio*. Faltó profundidad en otros periódicos de alta difusión como *El Espectador*, en lo que el trabajo se queda corto, pero la información consultada evidencia optimismo, aceptación y legitimación hacia el movimiento estudiantil. Percepciones válidas si se suma el hecho de que la idea central que surgió después de la *Marcha del Silencio* se logró: generar un movimiento ciudadano y legitimar política y constitucionalmente la modificación de la Constitución de 1886.

En este sentido, y entendiendo el trabajo como un texto preliminar, se puede afirmar que el movimiento estudiantil estudiado, en el periodo comprendido entre 1989 y 1991, no generó represión por parte del Estado colombiano, de las élites del poder ni de los diversos actores armados que acompañaban el día a día de nuestro país.

En medio del sistemático escalamiento de la violencia vivido por Colombia durante las dos últimas décadas del siglo XX, parecería que la paradoja del caso colombiano, caracterizada por procesos de democratización unidos a acciones represivas del Estado y de actores al margen de la ley avalados por ciertas instituciones estatales como el Ejército y la Policía, no se dio en el presente caso.

De hecho, las evidencias permiten sostener la tesis central de la teoría que habla de democratización como un proceso estatal que se asume de manera positiva y civilizadora: es decir, que a mayor democratización se presenta menos represión. El problema es que en Colombia lo ocurrido durante el tiempo de existencia del movimiento estudiantil fue excepcional; después de este y sus logros continuó la escalada de violencia durante los noventa, pese a contar con una nueva Constitución que protege las libertades civiles básicas, como pocas cartas políticas. Vino otra década, la primera del siglo XXI, en la que represión contra la protesta social disminuyó, particularmente en los crímenes contra sindicalistas, pero quedan muchas cosas sin resolver sobre todo frente a temas como los falsos positivos y las acciones de los paramilitares y de las denominadas Bacrim (bandas emergentes del movimiento paramilitar). Lo anterior no es objeto de esta investigación ni se encuentra sustentado, pero lo que sí es claro es que el movimiento estudiantil se mantuvo como entre una burbuja, protegido de la violencia.

Por otro lado, el movimiento estudiantil se presentó y puede ser entendido como una manifestación de la protesta social y de los derechos

que hacen parte de ella: libertad de expresión, manifestación y asociación. Que haya sido formalmente reconocido o no, no le resta fuerza al papel que jugó durante los dos años de su existencia y hasta la promulgación de la Constitución Política de 1991.

Muchos de quienes en el momento de las acciones eran activistas del movimiento hacen hoy parte de la vida del país desde el sector público y la academia, y encarnan una generación tan paradójica como el movimiento mismo: hijos de la violencia y de la democratización. Un artículo de *El Tiempo* comenta lo que significó para Carrillo la participación activa en este movimiento estudiantil: de la exclusión de una institución universitaria por considerarlo peligroso, pasó a ser asesor del presidente Gaviria en materias constitucionales y particularmente intervino con su curul en la Asamblea Nacional Constituyente, en la definición del temario de la reforma constitucional⁶¹.

Pero ellos no son los únicos. Yo entré a estudiar derecho en la Universidad de los Andes en 1992, es decir, aprendí con la nueva Constitución, fui alumna de muchos de los gestores de ella como Manuel José Cepeda y tuve como monitores a varios de los estudiantes que participaron en la protesta social conocida como Séptima Papeleta o *Todavía podemos salvar a Colombia*. Crecí en los ochenta, viví y fui espectadora de la guerra de todos contra todos que ocurrió en ese momento. Siguiendo lo dicho por

61 OBREGÓN, Carlos, "Constitucional con 70 miembros", *El Tiempo*, Sección Otros, fecha de publicación: 2 de agosto de 1990, en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-66896>, consultado el 2 de diciembre de 2012.

Francisco Gutiérrez en la clase de Represión y Democracia: nací en un país en el que no se ha vivido un solo día de paz, nací en 1974.

También presencié cómo la nueva Constitución parecía ser el detonante de un cambio muy positivo para Colombia, y creo que lo fue, pero también creo que la historia la construyen quienes la escriben y parece demasiado optimista creer que el movimiento estudiantil pasó de lado frente a la represión. Valdría la pena explorar más a fondo los perfiles de quienes han contado la historia para saber si hay situaciones no mencionadas sobre el tema, que permitan entender un poco más por qué Colombia sigue siendo un país democrático y altamente represivo.

Bibliografía

Libros, capítulos de libros y revistas académicas

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James, *Economic origins of dictatorship and democracy*, Cambridge University Press, 2005.

CALVO OSPINA, Hernando, *Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado*, Foca, ediciones y distribuciones generales, S.L., Madrid, 2008.

CARRILLO FLÓREZ, Fernando, “La Séptima Papeleta o el origen de la Constitución de 1991”, en: *La Séptima Papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas*, Colección textos de jurisprudencia, Editorial Universidad del Rosario, 2010.

CUÉLLAR, María Mercedes, *Los sindicatos y la*

asignación del ingreso en Colombia: un siglo de historia laboral, Primera Edición, Ediciones Universidad de los Andes, Bogotá, 2009.

DAHL, Robert, *Poliarchy. Participation and Opposition*, Yale University Press, 1971.

DAVENPORT, Christian, *State repression and the domestic democratic peace*, Cambridge University Press, 2007.

DAVENPORT, Christian; JOHNSON, Hank; MUELLER, Carol, (eds.), *Repression and mobilization*, University of Minnesota Press, 2005.

MAHECHA ARANGO, Natalia, *Linchamientos, crimen y protesta: justicia popular en Colombia (1990-2010)*, Documentos CESO (Centro de Estudios Socioculturales e internacionales) No. 187, Departamento de Ciencia política, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011.

MARTÍNEZ ORTIZ, Astrid, *Economía, crimen y conflicto*, Universidad Nacional de Colombia, Ediciones Antropos, Bogotá, 2001.

NORTH et al., “Violence and social orders”, Cambridge University Press.

QUINTERO RAMÍREZ, Óscar Alejandro, “Sociología e historia del movimiento estudiantil por la Asamblea Constituyente de 1991”, *Revista Colombiana de Sociología*, ISSN 0120 -159X, Vol. VII, Número 1 de 2002, pp. 125, 151.

TORRES FORERO, César Augusto. *De las aulas a las urnas. La Universidad del Rosario, la Séptima papeleta y la Constituyente de 1991*.

Colección Textos de Jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2007.

UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, “Colombia. Derecho penal y protesta social”, en: BERTONI, Eduardo, (compilador), *¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina*, Facultad de Derecho, Centro de Estudios en Libertad de expresión y acceso a la información (CELE), Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2010, pp. 47-74.

VELASCO JARAMILLO, Marcela, “Cambio institucional y protesta social en Colombia 1964-2000: análisis de series de tiempo”, *Revista Colombia Internacional* 63, ene.-jun. 2006, pp. 70-87: 71.

Normas

Constitución Política de Colombia, 1991.

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades fundamentales.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Prensa y páginas Web

CABALLERO, María Cristina, “Crónica del parto Constituyente”, [en línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-33518>, consultado el 1 de diciembre de 2012.

CARRILLO FLÓREZ, Fernando, “La quijotada de la séptima papeleta”, [en línea], <http://fundacionseptimapapeleta.wordpress.com/2010/01/22/la-quijotada-de-la-septima-papeleta-revista-cambio-nº-418-210601/>, consultado el 8 de noviembre de 2012.

D´ARTAGNAN, “Defensa de la 7a. Papeleta”, [en línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-115488>, consultado el 19 de noviembre de 2012.

FLÓREZ VÉLEZ, Omar, “Cambio 2000”, [en línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-133132>, consultado el 19 de noviembre de 2012.

GARCÍA, Wilson, “Movimiento estudiantil por la Constituyente”, [en línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-15375>, consultado el 19 de noviembre de 2012.

GARCÍA VILLEGAS, Mauricio, especial para El Espectador [en línea], <http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso43317-un-pais-de-estados-de-excepcion>, consultado el 23 de noviembre de 2012.

GONZÁLEZ POSSO, Camilo, “La séptima papeleta”, [en línea], <http://www.semana.com/nacion/septima-papeleta/153407-3.aspx>, consultada el 27 de noviembre de 2012.

NULLVALUE, “Constituyentes del 91”, [en línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/docu>

mento/MAM-57454, consultado el 2 de diciembre de 2012.

OBREGÓN, Carlos, Constitucional con 70 miembros, [en línea], <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-66896>, consultado el 2 de diciembre de 2012.

SÁNCHEZ RUSSO, Daniela, [en línea], <http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-275358-memorias-de-una-revolucion>, consultado el 2 de diciembre de 2012.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-41800>, consultado el 1 de diciembre de 2012.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-47614>, consultado el 2 de diciembre de 2012.

<http://septimapapeleta.blogspot.com/>, consultado el 3 de noviembre de 2012.

http://www.ife.org.mx/documentos/CFD/anexos/pdf/educiv_al.pdf, consultado el 2 de diciembre de 2012.

<http://www.un.org/es/documents/udhr/>, consultado el 17 de noviembre de 2012.

<http://www.semana.com/nacion/estudiantes-septima-papeleta/135928-3.aspx>, sábado 6 de marzo de 2010, *Adaptado de: Julieta Lemaitre, El Derecho como conjuro, Uniandes y Siglo del Hombre Editores, 2009, consultado el 3 de noviembre de 2012.

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2003/inedito.htm>, consultado el 19 de noviembre de 2012.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-14453>, consultado el 2 de diciembre de 2012.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3253>, consultado el 19 de noviembre de 2012.